



EL DERECHO DE ACCION PROCESAL DE LOS APOSTATAS EN EL CODIGO ORIENTAL

RAFAEL RODRIGUEZ-OCANA

1. *El supuesto de hecho contemplado en el decreto rotal*

La causa principal de la que da noticia la decisión rotal en su motivación tiene por objeto una demanda de separación matrimonial junto con la reclamación de la pensión alimenticia correspondiente.

La causa fue introducida por la esposa (M) ante el Tribunal de primera instancia maronita de Beirut el 25 de octubre de 1968. Realizada la conciliación entre las partes, fue abandonada para ser nuevamente reanudada por M en junio de 1971. El cónyuge varón (V), por su parte, introdujo la acción reconvenzional acusando el matrimonio de nulidad en base a los capítulos de fuerza y miedo.

A partir de entonces se sucedieron innumerables actuaciones procesales por ambas partes, poniendo de relieve —entre otras cosas— el valor del patrocinio legal y la asistencia técnica.

El decreto de la Rota romana, al describir brevemente las fases de la causa, establece los siguientes períodos dignos de mención:

1.º establecimiento —el 17.XII.1971— de la pensión alimenticia mensual en L. 800 por el Tribunal de primera instancia de Beirut;

2.º el 5.VII.1972, después de la apelación de M, el Tribunal de segunda instancia confirmó la pensión a favor de la mujer;

3.º el decreto rotal c. Lefebvre —26.VII.1973—, admitiendo la apelación de V, revoca la decisión del Tribunal de primera instancia;

4.º recurrido en apelación por M, el decreto rotal c. Raad (26.VII.1973)¹, en contra de la decisión c. Lefebvre, confirma el decreto del Tribunal de segunda instancia, fijando la pensión en Ll. 2.000, a percibir desde el 1.VII.1971;

5.º V recurrirá una vez más solicitando, en este caso, la *restitutio in integrum*, que le fue concedida por el turno rotal c. Bruno, el 25.V.1975. Pero, a instancia de M, el 3.II.1976, una nueva decisión (c. Pompedda) vuelve a ratificar la decisión dada en primera instancia. Tres días después (16.II.1976), y también a instancias de M, la Signatura Apostólica le concedió la *restitutio in integrum* a la proponente por evidente negligencia del derecho prescrito;

6.º el 1.V.1980, una nueva decisión rotal (c. Pinto) confirma la anterior c. Raad² y en contra del decreto c. Lefebvre;

7.º otras cuestiones incidentales propuestas por V fueron desestimadas en las decisiones c. Serrano y c. Di Felici;

8.º mientras tanto, la causa de nulidad promovida por V, obtuvo dos decisiones negativas; la primera el 20.I.1980 y, en apelación, el 10.VI.1981.

Llegados a este extremo, V recurrirá —en fin— a la Rota romana solicitando la querella de nulidad, *restituto in integrum* y la proposición de nueva causa. El recurso, sin embargo, no se acepta *in limine litis*. La razón aducida por la decisión c. Ragni (7.VI.1983) es la apostasía de V que le inhabilita para actuar en las causas eclesiásticas.

Propuesta la apelación al siguiente turno rotal (c. Colagiovanni), se le pide la resolución de la siguiente cuestión: si el varón apóstata de la fe, convertido formalmente al mahometismo el 20.XI.1982 y sin que se haya apartado de su deserción, tiene derecho de acción en el juicio eclesiástico.

2. El derecho de acción en los apóstatas de la fe

La posibilidad de que un apóstata pudiera poner en marcha, ejerciendo el derecho de acción, un proceso eclesiástico se remonta —en

1. Esta fecha debe estar equivocada, pues es la misma que la del decreto anterior (c. Lefebvre) apelado.

2. Sigue existiendo un error en la datación de ese decreto rotal, antes se decía que era de 26.VII.1973 y ahora se indica como fecha el 20.IV.1973.

la historia más cercana a nosotros, es decir, dentro del siglo XX— a los años posteriores al Código pío-benedictino, y cuenta con una larga e intrincada evolución.

La doctrina canónica y la praxis jurisprudencial comenzó a plantearse esta pregunta desde la concreta perspectiva del c. 1971 del Código de 1917³, es decir, el derecho a acusar el matrimonio, por ser en esta materia donde mayor número de casos concretos se planteaban.

El c. 1971 del CIC 17 ha sido objeto —por estas razones— de no pocas interpretaciones auténticas por parte de la Pontificia Comisión para la interpretación del Código, así como de algunas decisiones de la llamada entonces S.C. del Santo Oficio⁴.

El primer decreto del Santo Oficio que afecta directamente a nuestro tema (como así lo pone también de manifiesto el *in iure* del decreto rotal) es de 27 enero 1928⁵, y marca el inicio de la evolución que iremos describiendo⁶.

La decisión del Santo Oficio era motivada por la cuestión siguiente: si en las causas matrimoniales los *acatólicos* —bautizados o no— podían proceder como actores. La respuesta fue negativa, asentándose en la prescripción del c. 87 como fundamento. Además se añadió que, si por especiales causas pareciera necesario admitir a los acatólicos como actores en tales procesos, debía acudirse al Santo Oficio en cada caso⁷.

3. Por brevedad citaremos los diferentes Códigos de la siguiente forma: Código de Derecho Canónico de 1917, como CIC 17; el de 1983, como CIC 83; el Código de Derecho Canónico Oriental, como CICO.

4. Además de las que tenemos en cuenta a lo largo de la exposición, también pueden verse las respuestas de 17 julio 1933 —AAS XXV (1933), p. 345—; 27 julio 1942 —AAS XXXIV (1942), p. 241—; 6 diciembre 1943 —AAS XXXVI (1944), p. 94—; 4 enero 1946 —AAS XXXVIII (1946), p. 162—; y del Santo Oficio, decreto de 22 marzo 1939 —AAS XXXI (1939), p. 131— entre otros.

5. La fecha que se indica en el decreto rotal es distinta. La diferencia está en que el 18 enero 1928 (la señalada en el *in iure*) fue el día en que la S.C. del Santo Oficio adoptó la resolución, mientras que el 27 enero 1928 es la datación de su promulgación, cfr. AAS XX (1928), p. 75. Un comentario del decreto puede encontrarse en ROBERTI, F., *De competentia in causis matrimonialibus*, en «Apollinaris» I (1928), pp. 214-219; y VERMEERHCH, A., *De competentia in causis matrimonialibus mixtis*, en «Periodica» XVII (1928), pp. 53-56.

6. El decreto rotal no hace mención expresa de otras decisiones o interpretaciones, que más adelante aparecerán en el comentario y que tienen especial interés.

7. «I. Utrum in causis matrimonialibus acatholicus sive baptizatus, sive non baptizatus, actoris partes gerere possit.

Resp.: *Negative* seu standum est C.J.C. praesertim can. 87. Si quidem autem

El mismo decreto también respondió a otro *dubium* que se le formulaba junto con el anterior: si en las causas matrimoniales entre parte católica y parte acatólica (bautizada o no) denunciadas ante la Santa Sede, correspondía al Santo Oficio la exclusiva competencia. En este caso la respuesta será afirmativa, teniendo en cuenta las competencias que el § 3 del c. 247 (CIC 17) otorgaba a dicha Sagrada Congregación, exceptuándose los casos del c. 1557 § 1, 1.º⁸.

A partir de 1928, por tanto, el derecho a acusar el matrimonio venía limitado, en el caso de los cónyuges, por dos extremos: haber sido causa del impedimento⁹ y ser acatólico.

La fundamentación del segundo límite (ser acatólico) se encontraba —como se ha dicho— en el c. 87 del CIC 17, «pues el *ius agendi* ante un tribunal eclesiástico lo regulaba el derecho positivo de la Iglesia, y no lo otorgaba a los no bautizados porque no tenían personalidad jurídica en la Iglesia, y tampoco a los bautizados acatólicos porque su personalidad jurídica estaba limitada por el óbice que impedía la plena comunión eclesiástica»¹⁰.

La resolución del Santo Oficio chocaba sin embargo con las propuestas de algunos autores para los que el *ius accusandi matrimonium* compete a los cónyuges por instancia del derecho natural¹¹, al tiempo que no se tenían en cuenta los intereses superiores dimanados del carácter declarativo del proceso de nulidad.

A pesar de ello, la Instrucción *Provida Mater*¹² recogió las anteriores prescripciones de la Sagrada Congregación del Santo Oficio en su art. 35 § 3: «Asimismo no pueden intervenir como actores en las causas matrimoniales los acatólicos, sean bautizados o infieles; pero

speciales occurrent rationes ad admittendos acatholicos uti actores in huiusmodi causis recurrendum ad S.C.S.O., in singulis casibus». AAS XX (1929), p. 75.

8. «II. Utrum in quibuslibet causis matrimonialibus inter partem catholicam et partem acatholicam, sive baptizatam sive non baptizatam, quocumque modo ad S. Sedem delatis, S.C.S.O. exclusivam habeat competentiam.

Resp.: *Afirmative*, habita praesertim ratione huius can. 247 § 3, et salvo praescripto can. 1557 § 1, 1.º. *Ibid.*

9. Sobre la inhabilidad para acusar el matrimonio del cónyuge causa del impedimento, cfr. JORDAN, M. L., *Mala fe y acción de nulidad en el matrimonio canónico*, Pamplona 1985; y VITALE, A., *Inhabilitas ad accusandum matrimonium*, Napoli 1963.

10. ACEBAL, J. L., *Respuestas recientes de los dicasterios pontificios*, en «Revista Española de Derecho Canónico» XXIX (1973), p. 151.

11. Cfr. GASPARRI, P., *Tractatus canonicus de matrimonio*, Romae 1932, p. 292; y JEMRIC, J., *De iure accusandi matrimonium in limine novi iuris condendi*, en «Apollinaris» XL (1967), p. 363.

12. Cfr. AAS XXVIII (1936), pp. 313 ss.

si hay razones especiales para admitirlos, se ha de recurrir en cada uno de los casos a la S.C. del Santo Oficio».

Los años sucesivos pondrán de relieve que aún quedaban dudas sobre los extremos en principio aclarados por la decisión de 1928 y el art. 35 § 3 de la Instrucción. En concreto serán tres las nuevas decisiones que tomarán como base la de 1928.

En primer lugar se encuentra la de 27 febrero de 1937¹³, también del Santo Oficio, con la pretensión de aclarar si entre los acatólicos —en orden al *ius accusandi*— se hallan también incursos aquellos que nacidos y bautizados en la Iglesia Católica, abandonan después la fe, o dan su nombre a una secta acatólica o se declaran sin religión. La respuesta fue afirmativa, a efectos de la resolución del Santo Oficio de 1928¹⁴.

La misma óptica se manifiesta también en la decisión de 1940 del Santo Oficio. En la consulta se expresaba la duda de si entre los acatólicos, que según el decreto del Santo Oficio de 18 enero 1928 se les prohibía actuar en las causas matrimoniales, se contaban también los apóstatas de la fe. La respuesta fue *affirmative*, sin entrar en detalles de fundamentación¹⁵.

Un tercer decreto del Santo Oficio, esta vez de 1939, toma igualmente como base la resolución de 1928. A la Congregación le eran propuestas ahora dos cuestiones procesales nacidas de la prohibición del *ius accusandi* a los acatólicos. Las respuestas fueron: a) que la prohibición del derecho a acusar el matrimonio a los acatólicos afectaba tanto al ámbito de la Rota de Roma como al de los tribunales diocesanos, quedando resueltas de este modo las dudas surgidas en aquel entonces por el tenor del art. 12 de la Instrucción *Provida Mater*, cuando prescribía que de las causas entre parte católica y parte acatólica, sea ésta bautizada o infiel, puede conocerse en primera instan-

13. Esta resolución la cita FILIPIAK, B., *De iure acatholicorum accusandi matrimonium*, en «Ephemerides Iuris Canonici» XXIX (1973), p. 177; sin que conste el lugar de dónde la toma. No aparece de hecho en las AAS de 1937 ni de 1938.

14. «(27.2.1937) Utrum etiam apostatae, ii scilicet qui nati et baptizati in Ecclesia Catholica postea a vera fide deficientes vel nomen dederint sectae acatholicae, vel «sine religione», esse sese declaraverint, sint recensendi, in ordine ad jus accusationis in causis matrimonialibus inter acatholicos.

Resp.: *Affirmative* seu apostatas a Fide ad effectum declarationis S. Officii diei 18.I.1928 recensendos esse inter acatholicos». FILIPIAK, B., *art. cit.*, p. 177.

15. «An inter acatholicos qui, iuxta decretum S. Officii diei 18. I. 1928 in causis matrimonialibus agere prohibentur, connumerandi sint etiam apostatae a fide.

Resp.: *Afirmative*». AAS XXXII (1940), p. 52. Para su comentario doctrinal, cfr. ROBERTI, F., *S.C.S. Officii: Decretum*, en «Apollinaris» XIII (1940), pp. 7-10.

cia y en segunda por los tribunales diocesanos; b) y que el promotor de justicia no podía acusar el matrimonio, a tenor del c. 1971, mediando denuncia del cónyuge acatólico, si no contaba con la licencia del Santo Oficio, a no ser que, a juicio del Ordinario, la denuncia viniese postulada por el bien público¹⁶.

Con estas medidas, el cónyuge acatólico veía cerrado cualquier camino de acusación del matrimonio siempre que partiera de él la iniciativa, con las excepciones de licencia del Santo Oficio, o de bien público en el caso de la denuncia. Al decir de la doctrina, sin embargo, la prohibición no alcanzaba a los casos exceptuados¹⁷, por varias razones: porque la respuesta de 1928 sólo atendía al proceso ordinario; porque el c. 1990 del CIC 17 recogía el derecho anterior según el cual se debía interpretar dicha disposición codicial y, por tanto, en el proceso sumario la competencia corresponde al Ordinario del lugar aunque el acusador fuera acatólico; y, en fin, porque la aplicación de la resolución de 1928 del Santo Oficio al c. 1990 hubiese supuesto una restricción a los derechos del Ordinario, lo que sólo puede hacerse a través de una respuesta de la Comisión de intérpretes¹⁸.

Las incertidumbres no terminaban aquí, entre otras razones, porque en la práctica podían plantearse problemas sobre la existencia de la prohibición en los casos de apostasía no notoria¹⁹, sin olvidar, además, la difícil postura de que un acatólico podía ser parte pasiva en el proceso, cuando era el cónyuge católico quien acusara el matrimonio, pero no parte activa.

Así las cosas, el 6 de enero de 1950 se promulgan mediante el

16. «I. Utrum decisio S.C.S.O. data die 18 januarii 1928 ad I, qua nempe declaratum fuit acatholicos in causis matrimonialibus actoris partes agere non posse, spectet tantum ad Tribunal S.R. Rotae, an etiam ad Tribunalia dioecesana.

Resp. *Negative* ad primam partem; *affirmative* ad alteram, seu: *spectare etiam Tribunalis dioecesana*.

II. Utrum Promotor Justitiae, vi can. 1971, nulla praehabita facultate a S. Officio, matrimonium accusare possit si nullitas matrimonii fuerit denunciata a coniuge acatholico.

Resp. *Negative, nisi bonum publicum, Ordinarii iudicio, id postulet*. AAS XXXI (1939), p. 131. Para su comentario, cfr. ROBERTI, F., *Decretum de competentia in causis matrimonialibus, et de iure promotoris iustitiae accusandi matrimonia acatholicorum*, en «Apollinaris» XII (1939), pp. 157-161.

17. Cfr. ACEBAL, J. L., *art. cit.*, p. 151.

18. Cfr. REGATILLO, E., *Derecho matrimonial eclesiástico*, Santander 1962, p. 396, n.º 634.

19. Cfr. ACEBAL, J. L., *art. cit.*, p. 151.

m.p. *Sollicitudinem Nostram*²⁰ las normas *de iudiciis pro ecclesia orientali*. Divididas en tres partes, en la segunda, sección tercera, cc. 468 ss., se recogen las relativas a las causas matrimoniales. Y el *ius accusandi* se inscribe en el c. 478.

La comparación²¹ entre el c. 478 del CICO y el c. 1971 del CIC 17 muestra que para la elaboración de las normas orientales se tuvieron en cuenta las distintas interpretaciones de que fue objeto el canon latino.

El c. 478 del CICO prescribe que:

«§ 1. Habiles ad accusandum sunt:

1.º Coniuges, in omnibus causis separationis et nullitatis, nisi ipsi fuerint impedimenti vel, etiam alia ratione, nullitatis matrimonii causa directa et dolosa.

2.º Promotor iustitiae in impedimentis natura sua publici.

§ 2. Reliqui omnes, etsi consanguinei, non habent ius matrimonia accusandi, sed tantummodo nullitatem matrimonii Hierarchae loci vel promotori iustitiae denunciandi. Eodem iure gaudent coniuges ad accusandum matrimonium inhabiles.

§ 3. In causis de nullitate matrimonii, ut acatholici, sive baptizati sive non baptizati, partes actoris agere queant, indigent facultate impetranda a S. Congregatione S. Officii»²².

Dejando a un lado las adiciones del § 1, 1.º y del § 2²³ en relación con el canon latino, interesa sobre todo observar cómo el § 3 recoge la respuesta del Santo Oficio de 1928 dándole una formulación positiva, a diferencia del art. 35 § de la Instrucción *Provida Mater*. A ello debe añadirse que, dentro del término «acatólicos» —según otra disposición de la misma Sagrada Congregación, de 1940—, también se incluyen a los apóstatas de la fe católica.

20. Cfr. AAS XLII (1950), pp. 5-120. Un extenso comentario a esas disposiciones procesales puede hallarse en GALTIER, F., *Code Oriental de Procédure Ecclésiastique*, Beyrouth 1951. Lo cita también el *in iure* del decreto rotal objeto de nuestro comentario.

21. Una exhaustiva comparación, aunque falta de conclusiones, entre las normas procesales latinas y orientales a tenor del CIC 17 y del m.p. *Sollicitudinem Nostram* lo realiza PRIETO, I., *Cánones del derecho procesal de la Iglesia latina comparados con los de la Iglesia oriental*, en «Revista Española de Derecho Canónico» VII (1952), pp. 743-797.

22. M.p. *Sollicitudinem Nostram*... cit., p. 102.

23. Para el § 1, 1.º véanse las respuestas contenidas en AAS XXI (1929), p. 171 e *id.* XXXIV (1942), p. 241; para el § 2, cfr. AAS XXII (1930), p. 196; *id.* XXV (1943), p. 345 e *id.* XXXVI (1944), p. 94.

Hasta aquí llega la normativa actualmente en vigor para las Iglesias orientales, sin que se hayan producido otros cambios, aunque —como se verá más adelante— en la elaboración del nuevo CICO, ya muy avanzada, se da un tratamiento diverso a toda esta temática, siguiendo los pasos a la regulación del CIC 83.

A pesar de lo que acaba de afirmarse, cabe plantearse la duda sobre la vigencia de la prohibición para los acatólicos y apóstatas, dentro de la Iglesia oriental, a raíz de la respuesta de 8 enero 1973 dada por la Pontificia Comisión para la interpretación de los decretos del Concilio Vaticano II. El *dubium* que se propuso contraponía el vigor del decreto del Santo Oficio de 1928 y del art. 35 § 3 de la Instrucción *Provida Mater*, a la existencia de la Const. *Regimini Ecclesiae* y al m.p. *Causas matrimoniales*; respondiendo la Comisión de intérpretes que las primeras normas ya no estaban vigentes²⁴.

La duda sobre si el alcance de la respuesta llega a las normas orientales proviene del carácter de la Pontificia Comisión, que por ser un órgano para la interpretación de los documentos ejecutivos del Concilio Ecuménico Vaticano II deberían extender, en principio, sus decisiones a toda la Iglesia. Siendo ello cierto, debe tenerse en cuenta, sin embargo, el ámbito de las normas objeto de interpretación, pues no siempre alcanzan, en relación con su obligatoriedad, a toda la Iglesia.

Respecto al caso que nos ocupa, el m.p. *Causas matrimoniales* era competente sólo para la Iglesia latina, y aunque sus disposiciones nacieran *ad mentem Concilii* en nada disminuían el valor del m.p. *Sollicitudinem Nostram*.

Una mayor dificultad pudiera provenir de la REU, al llevar ésta a cabo una total reorganización de la Curia romana. Concretamente, en lo que afecta a la temática aquí estudiada, el n. 109 de la REU extendió a la Rota romana las causas de nulidad debidamente llevadas a la Sede Apostólica, ya fueran entre parte católica y acatólica ya entre partes acatólicas, aunque una o ambas partes bautizadas per-

24. D. Utrum, attentis decretis Concilii Oecumenici Vaticani II, atque prae oculis habitis Constitutione Apostolica *Regimini Ecclesiae Universae*, diei 15 augusti 1967, et Litteris Apostolicis *Causas Matrimoniales*, diei 28 martii 1971, vigeat adhuc responsum S.S.C.S. Officii diei 27 ianuarii 1928, et art. 35 § 3 Instructionis S. Congregationis de disciplina Sacramentorum *Provida Mater*, diei 15 augusti 1936, vi cuius acatholici, sive baptizati sive non baptizati, actoris partes agere in causis matrimonialibus nequeunt, nisi de licentia S. Congregationis pro Doctrina Fidei, singulis in casibus impetranda.

R.: *Negative*, seu amplius non vigere». AAS LXV (1973), p. 59. Para comentario, cfr. ACEBAL, J. L., *art. cit.*, y FILIPIACK, B., *art. cit.*

tenecieran al rito latino o a los ritos orientales. La disposición —según entiende el decreto rotal c. Colagiovanni— es, en efecto, aplicable a las Iglesias orientales lógicamente, pero sólo en lo referente al órgano competente al que debe acudir en una causa matrimonial de esa especie; es decir, que los cónyuges no pueden dirigirse, desde la vigencia de la REU, al Santo Oficio (o S.C. para la Doctrina de la Fe) porque éste sólo tiene competencias —según el n. 109— sobre las cuestiones *dotrinales* relativas a la fe²⁵.

Estas normas de la REU dejan sin embargo intactas las disposiciones de la Iglesia oriental sobre la prohibición de actuar en juicios eclesiásticos a los apóstatas, y más concretamente las que regulan el *ius accusandi matrimonium*, que son, a su vez, las que señalan quién, cuándo y cómo pueden dirigirse los cónyuges a la Rota romana en las causas matrimoniales en las que al menos una parte es acatólica o apóstata.

Por tanto, para la Iglesia oriental siguen en vigor los cánones del m.p. *Sollicitudinem Nostram*, así como las diferentes respuestas que afectan a las causas matrimoniales de parte acatólica, estando en pie las prescripciones de la REU cuando proceda elevar una causa a la Sede Apostólica.

3. *La futura normativa del CICO*

a) «*Iter*» de la elaboración del CICO

En este apartado se intenta dar una breve reseña de lo que hasta el momento se ha llevado a cabo en la elaboración del Código de Derecho Canónico para las Iglesias Orientales.

La codificación del derecho canónico oriental remonta sus inicios al 3 agosto 1927, fecha en la que Pío IX instituyó el Consejo de Presidencia con la finalidad de promulgar un CICO común a todas las iglesias católicas orientales²⁶. Al Consejo le siguió —el 23 noviembre 1929— la creación de la Comisión Cardenalicia para los trabajos preparativos de la codificación oriental, presidida durante varios años por el Cardenal P. Gasparri. El 17 julio 1935 la Comisión anterior

25. Cfr. también los nn. 29 y 31 de la REU.

26. Cfr. ZUZEK, I., *Les textes non publiés du Code de Droit Canon Oriental*, en «Nuntia» I (1975), p. 25, nota 6.

se disolvió para dar paso a la creación de la Pontificia Comisión para la redacción del Código de Derecho Oriental²⁷.

Después de diez años de trabajo, en 1945, se imprimió el primer esquema del CICO²⁸, entregado tres años más tarde al Romano Pontífice²⁹. La promulgación —como bien se sabe— se produjo escalonadamente, a través de cuatro «motu proprio» de Pío XII, pero que sólo abarcaban parte de los 24 títulos que integraban el esquema del CICO³⁰.

En concreto sólo se promulgaron diez títulos, repartidos en las siguientes disposiciones:

1.º m.p. *Crebrae allatae sunt*: contiene el título XIII: «De matrimonio»³¹;

2.º m.p. *Sollicitudinem Nostram*: el título XXI: «De iudiciis»³²;

3.º m.p. *Potsquam Apostolicis*: los títulos XVI («De monachis ceterisque religiosis»), XIX («De bonis Ecclesiae temporalibus») y XXIV («De verborum significatione») ³³;

4.º m.p. *Cleri Sanctitati*: inserta los títulos II («De ritibus orientalibus»), III («De personis physicis et moralibus»), IV («De clericis in genere»), V («De clericis in specie») y XVII («De laicis») ³⁴.

La puesta en marcha del Concilio Vaticano II junto al objetivo anunciado por Juan XXIII de elaborar un Código para la Iglesia oriental, se concretó el 10 junio 1972 con la aparición de la Pontificia Comisión para la revisión del CICO instituida por Pablo VI³⁵.

La revisión ha dado lugar al *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis* de 1986³⁶.

27. Cfr. *ibid.*

28. Cfr. *ibid.*, p. 23.

29. Cfr. *ibid.*, p. 29.

30. La decisión de adoptar la división en títulos, a diferencia del Código latino, aparece ya en 1929, cfr. «Nuntia» XI (1980), p. 84.

31. Cfr. AAS XLI (1949), pp. 89-119.

32. Citado en nota 20.

33. Cfr. AAS XLIV (1952), pp. 65-152.

34. Cfr. AAS XLIX (1957), pp. 433-603. Una relación de los títulos del CICO tal como se presentaba en 1945 puede encontrarse en «Nuntia» IX (1979), pp. 91-92.

35. Cfr. «Nuntia» I (1975), pp. 11 ss., donde se da noticia de la creación y composición de la Pontificia Comisión CICO *recognoscendo*.

36. Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICIS ORIENTALIS RECOGNOSCENDO, *Schema Codicis Iuris Canonici Orientalis*, Romae mense iulio 1986, 276 págs.

b) *El «ius accusandi» en el esquema del CICO de 1986*

La revisión del derecho oriental en lo que se refiere al derecho a acusar el matrimonio por los cónyuges ha introducido las mismas variaciones que en su día realizó el CIC 83.

En efecto, los dos cánones pilares en los que se asentará la futura regulación (cc. 1149 y 1375 del esquema) son idénticos a los cc. 1476 y 1674 del CIC 83.

Por el primero (c. 1149, esquema CICO) se prescribe que «Quilibet sive baptizatus sive non baptizatus potest in iudicio agere; pars autem legitime conventa respondere debet». La diferencia con el c. 161 del m.p. *Sollicitudinem Nostram*³⁷ es la misma que existe entre el c. 1476 del CIC 83 y el c. 1646 del CIC 17, y consiste en la desaparición de la cláusula «nisi a sacris canonibus prohibeatur», y en la explicitación del «baptizatus sive non baptizatus».

El «nisi a sacris canonibus prohibeatur» era lo que posibilitaba en el CIC 17 —a tenor de las respuestas del Santo Oficio— la prohibición de actuar a los acatólicos y apóstatas. Dentro de esos cánones inhabilitantes se contaba el 2263 del CIC 17, por el que se apartaba al excomulgado (y todos los apóstatas lo son)³⁸ de los actos legítimos eclesiásticos —dentro de los límites señalados por el derecho— y de la cualidad de actor en las causas eclesiásticas, salvando lo prescrito en el c. 1654 CIC 17.

Este mismo tratamiento es posible aún en la normativa oriental, y así viene interpretado por la doctrina³⁹. Incluso cabe decir que los cánones del m.p. *Sollicitudinem Nostram* son más explícitos todavía. Concretamente, el c. 169 § 2 —paralelo al c. 1654 § 2 del CIC 17—, al tratar de la comparecencia en juicio de los excomulgados, añade que podrán comparecer siempre que no se les haya opuesto la excepción de excomunión del c. 143 § 3 CICO⁴⁰.

En resumen, el Código procesal oriental aún en vigor contiene el mismo tratamiento que el CIC 17, coartando el acceso a las causas eclesiásticas a los apóstatas en razón de la excomunión en que están incurso y también por su equiparación a los acatólicos, permitiénd-

37. «Quilibet potest in iudicio agere, nisi a sacris canonibus prohibeatur; reus autem legitime conventus respondere debet». AAS XLII (1950), p. 40.

38. Cfr. c. 2314 CIC 17 y c. 1364 CIC 83.

39. Cfr. GALLTIER, F., *o.c.*, pp. 149-152 y 185-186.

40. El c. 143 § 3 del CICO (m.p. *Sollicitudinem Nostram*) prescribe lo mismo que el derogado c. 1628 § 3 del CIC 17: «la excepción de excomunión puede oponerse en cualquier estado y grado del juicio, con tal que sea antes de la sentencia definitiva».

doseles en todo caso impugnar la justicia o legitimidad de su excomunión (c. 169 § 1 del m.p. *Sollicitudinem Nostram*) y pedir, para las causas matrimoniales, la licencia a la Rota romana.

Por lo que se refiere al supuesto de hecho del decreto rotal, ha de señalarse que la reconvencción del cónyuge V, pidiendo la nulidad del matrimonio, parece ser una medida tendente a soslayar la imposición de la pensión alimenticia, ya que, declarada la nulidad, cesa la obligación de mantenimiento⁴¹.

Volviendo al c. 1149 del esquema del CICO se advierte en él la decisiva impronta de las enseñanzas del Concilio Vaticano II (lo mismo que ocurre en el c. 1476 CIC 83), en las que se rechaza cualquier discriminación basada en razones de sexo, religión, etc.⁴². A toda persona física se le reconce por ello la aptitud para ser titular de derechos procesales, que se ejercitarán según las normas canónicas al caso. El c. 1149 del esquema tiene, en consecuencia, el carácter de ser un «precepto primario para la constitución del contradictorio procesal»⁴³, y una concreción de la dignidad de la persona humana en el ámbito judicial.

Colocadas esas bases, no plantea —desde esta perspectiva— ningún problema el c. 1375 del esquema CICO cuando señala que «habiles sunt ad matrimonium impugnandum: 1.º coniuges»⁴⁴, sin prescribir ningún otro límite en cuanto a ser acatólico o apóstata de la fe.

41. Un resumen de las causas en materia de pensión alimenticia, dentro del derecho oriental y las decisiones de la Rota, puede hallarse en KHOURY, J., *La Jurisprudence de la Sacrée Rote Romaine dans les causes des Eglises Orientales*, vol. I, Romae 1972, pp. 163-164.

42. Cfr. FILIPIAK, B., *art. cit.*, pp. 172 ss.; ACEBAL, J. L., *art. cit.*, p. 152, nota 28 donde se recogen los documentos del Concilio Vaticano II sobre estas enseñanzas.

43. DE DIEGO-LORA, C., *Comentario al c. 1476*, en «Código de Derecho Canónico. Edición anotada por el Instituto Martín de Azpilcueta». Pamplona 1987, p. 889.

44. *Schema Codicis...*, *cit.*, p. 237.